



LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICAS DE ESTADO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO

THE FIGHT ANTI-CORRUPTION AND AGAINST CITIZEN INSECURITY AS STATE POLICIES IN PERUVIAN CONSTITUTIONAL LAW

MADELEINE LILIANA ORTIZ TOLEDO

RESUMEN

Siendo un tema tan álgido y crucial en el Perú actual lo que atañe a la corrupción y a la inseguridad ciudadana, es hora de tomar en serio una lucha frontal en estos dos campos desde el marco constitucional, a fin de que se tenga que afrontar estos problemas que requieren la voluntad política por un lado y en segundo lugar requiere, también el compromiso conjunto a través de Políticas de Estado, de normas que tengan el rango de constitucionales para instaurar un sólido Estado de Derecho, y establecer acciones conducentes a que la lucha por la inseguridad ciudadana, tenga que ser más eficiente y efectiva, estableciendo por ejemplo una lucha integral de modo preventivo y modo punitivo en el caso de la corrupción y en el caso de la Inseguridad ciudadana que sea mejor el rol de la Policía Nacional del Perú, estableciendo que los Municipios tengan que tener mayor participación efectiva, o propiciando las rondas urbanas que obedezcan a una matriz que sería a partir de Políticas de Estado. La situación lo amerita, y es por ello que desde la Constitución necesitamos establecer mecanismos más idóneos que tengan que plasmarse en logros efectivos desde el rol del Estado y la Sociedad, no olvidemos que el Artículo Primero de la Constitución al señalar que la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la Sociedad y el Estado, nos emplaza a cerrar filas por la defensa del ser humano en su integridad.

Palabras Clave: Constitucionalidad, corrupción, estado, inseguridad ciudadana, orden constitucional, políticas de estado, primacía, sociedad y supremacía constitucional.

ABSTRACT



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Being such an important and crucial issue in Peru today that it concerns corruption and citizen insecurity, it is time to take a frontal struggle seriously in these two fields from the constitutional framework, so that these problems have to be addressed and require political will. On the other hand, it also requires the joint commitment through State Policies, the norms that have the status of constitutional to establish a solid rule of law, and establish actions conducive to the fight for citizen insecurity, they must be more efficient and effective, establishing for example, a comprehensive fight in a preventive and punitive manner in the case of corruption and in the case of citizen insecurity, which is better the role of the National Police of Peru, establishing that municipalities must have a greater effective participation, or promoting urban rounds that obey a matrix that would be based on the Political State. The situation deserves it, and that is why since the Constitution we need to establish more adequate mechanisms that have to be translated into effective achievements of the role of the State and Society, let's not forget that the first article of the Constitution when pointing out that The human person and the Respect for their dignity is the supreme objective of the Society and the State, it calls us to close ranks for the defense of the whole human being.

Keywords: Constitutionality, corruption, state, citizen insecurity, constitutional order, state policies, primacy, society and constitutional supremacy.

INTRODUCCIÓN

La corrupción conjuntamente con la Inseguridad ciudadana son dos problemas agudos y complejos que atraviesa en este momento la sociedad peruana, siendo un desafío para el Estado, así como para todos los ciudadanos, puesto que su incremento ha resultado casi inmanejable puesto que son las áreas más crispadas y polémicas del ámbito del derecho, la sociología y la política (García Mejía, 2016); Si bien no existe un concepto bien definido de corrupción, se puede entender como práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, cualquier cosa de valor para influir en las acciones de la otra parte (Macera, 2015). Por su parte, Arapa (2016) define la corrupción como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona; concepto con el que coincide (Ochoa Romero, 2017).



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



La corrupción en el sector público es una práctica que consiste en aprovechar para beneficio privado, económico o de otra índole, los recursos públicos por parte de gobernantes, funcionarios y personas, empresas u organizaciones del sector privado o no gubernamental (Quiroz 2015), lo relevante es que ha cobrado importancia en los últimos años, una conciencia de lucha contra estos males, desde fines del siglo XX (Castillo, 2001). En nuestra perspectiva, es posible que la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana puede revertirse si es que hay reglas claras desde el Estado y el compromiso serio de parte de la ciudadanía (Bernaola 2007). El impulso de la ética como alternativa a la corrupción y la seguridad ciudadana es una tarea de todos, en el sentido de que es el estado social que en su situación de co-gobernabilidad, debe tener en cuenta que todos, debemos de procurar conducirnos en una línea ética de responsabilidad y liberación (Suarez Garza, 2011).

La perspectiva aquí asumida concibe a la seguridad ciudadana como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos (Sanchez Agesta, 1990). Para mejorar la lucha contra la delincuencia es fundamental mejorar la calidad de un debate muy simplificador que sólo aborda el tema policialmente, manteniendo la discusión encerrada entre cuestiones como hacer imputables a los niños, crear cárceles especiales para niños y adolescentes, presionar a los jueces por mayores penas y gastar más en seguridad (Garay Salamanca, 2007).

El Perú ha sido profundamente afectado por una corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días, lo que ha limitado el desarrollo y el progreso del país (Altamirano, 2017). A través del tiempo, se ha comprobado que la corrupción afecta de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad (Defensoría del Pueblo, 2004). Hay diversas iniciativas que reducir la corrupción no constituye un fin en sí mismo, sino que es una medida necesaria para lograr el objetivo más amplio de un gobierno más eficaz, justo y eficiente. Quienes la combaten están preocupados no tanto por la corrupción per se, sino más bien por los efectos que tiene sobre la sociedad (Rodolfo Luis, 2003). Por tanto, es importante evaluar



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



sus costos y entender que es imposible eliminarla por completo, basado en la documentación general sobre los problemas de corrupción y coherente con el árbol de problemas planteado (Bazalar Gonzales, 2012).

Según Levisky (2012) Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios públicos no llegan y, si llegan, son plagados por la corrupción y la ineficiencia» (Gutierrez, 2016). Estas variables están vinculadas, directa e indirectamente, a la inseguridad violencia y la delincuencia. Se requiere, la presencia y acompañamiento de un ente rector y una buena estrategia ya que un plan sin recursos es solo un documento formal, sin mayor trascendencia de acción sobre la realidad concreta (Fruhlling E., 2003). Entre los factores vinculados a la débil participación ciudadana, de la sociedad civil organizada, del sector privado y de los medios de comunicación en la prevención de la violencia y el delito, también se incluye la falta de valores y de una cultura cívica respetuosa de la ley (Rafael Heredia, 2018). Los medios de comunicación venden la violencia en un nivel primario, lo cual permitiría construir una percepción a todas luces distorsionada del fenómeno, pudiendo magnificar la realidad, insensibilizar a la población local y alertar a la internacional (Pillaca, 2015).

La baja calidad y cobertura del servicio policial se debería a varios factores: al escaso desarrollo organizacional de la Policía Nacional; a la insuficiente infraestructura y equipamiento; a la debilidad del régimen disciplinario y de lucha contra la corrupción de sus integrantes (Tito 2017). En la última década, solo uno de cada tres peruanos (34,2 %) expresó su confianza en la institución policial, hay una amplia desconfianza ciudadana (Cespedes 2009).

El Problema de la inseguridad ciudadana requiere soluciones multicausales que lo estaremos viendo dentro del desarrollo de la presente, ya que a pesar del sensacionalismo con que se suele tratar el tema y del interés de algunos sectores en ganar votos como sea, una parte considerable de la opinión pública está abierta a una discusión más amplia (Basombrio 2004). También estaremos viendo si los jueces tienen culpa ya que se argumenta que estarían dejando salir a delincuentes que después vuelven a reincidir, la



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



realidad no es tan sencilla. Según Talavera (2000) el costo es mucho menor que el de los juicios y cárceles, facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado. El juez antes de aplicar una norma, para dar una solución a un caso, debe examinar, si la norma que va ser aplicada, concuerda con las normas constitucionales. Mientras que la sociedad es indiferente a su destino, las mafias les ofrecen incentivos económicos inmediatos, como señala Garay (2007) la base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas. Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación.

La supremacía de la constitución, según Bidart (1994) se proyecta a todo el orden jurídico infraconstitucional y lo subordina a ella; la constitución es toda ella jurídica y tiene fuerza o vigor normativos. Para (Fayt, 1973) describe a la supremacía, en los siguientes términos: “La ley suprema porque ninguna Ley le es anterior; fundamental porque de ella derivan todas las leyes y suprema por ser inviolable para los habitantes del territorio donde impera y a ella debe adecuarse la acción del gobierno”. La aplicación directa de la Constitución por el Juez, en los países de la región, ha resultado del trabajo doctrinario y su influencia en los precedentes judiciales (Nuñez, 2015). Las normas y principios constitucionales se constituyen así en el primer elemento de interpretación de las reglas legales (Peces-Barba, 1980).

La Constitución es sumamente importante porque ella mantiene unido los demás sistemas jurídicos, y además no solo es la ley fundamental de todo Estado de Derecho, sino que permite determinar cuáles son las demás leyes (Tanzi, 1998). La Constitución deja de ser así un mero catálogo de derechos públicos sin práctica, para las personas, así como una mera descripción de los órganos y funciones del poder público, para constituirse en la norma que estructura el resto del ordenamiento jurídico (Afanasyev, 1973). Las políticas de estados son más sustentables y sostenibles en el tiempo, además que tienen el respaldo de la misma Constitución y por ende del Tribunal Constitucional y de todos los jueces o Magistrados constitucionales. Una política de Estado es una propuesta que refleja el clamor de toda la sociedad y requiere el concurso de todos los ciudadanos que puedan poner un poco de cada uno de ellos para contribuir a superar estos males transversales que todos los peruanos deben superar (Mattos, 2015). Por eso la presente se enfocó a



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



partir del marco constitucional para que dentro del esquema del pacto social, que refleja la legitimidad de una Constitución, exprese una demanda colectiva, donde se encuentra comprometido el soberano pueblo que tiene el poder originario, para que comprometa a las instituciones pública y privadas y al mismo Estado a fin de que puedan tener abocamiento de emprender la lucha contra la corrupción de una manera decidida, así como contra la inseguridad ciudadana (Arapa Valencia, 2016).

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: determinar acciones normativas desde la Constitución y los Derechos Humanos para establecer marcos de soluciones integrales y efectivas a los problemas de la Corrupción y la Inseguridad ciudadana en el País. Teniendo los siguientes objetivos específicos. Determinar el marco normativo que puede asumir la Constitución respecto a los temas de Corrupción y de la inseguridad ciudadana en el Perú y plantear un diseño básico consignado en la Constitución como Políticas de Estado para luchar contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

MÉTODOS

Ámbito o lugar de estudio

La investigación realizada tiene un alcance a nivel nacional, por cuanto se constituye el Universo de estudio, la lucha anticorrupción y contra la inseguridad ciudadana como políticas de estado en el derecho constitucional peruano, siendo el ámbito de aplicación de dichas normas en todo el territorio nacional; por lo que, el ámbito de estudio para la presente investigación se encuentra constituido por el territorio nacional. En cuanto al acceso al campo, uno de los procedimientos fue el análisis de textos, es decir libros, artículos entre otros que fueron objeto de una ficha de análisis de contenido. Las dificultades se enmarcaron fundamentalmente en la búsqueda de trabajos que enfoquen el tema desde la jurisprudencia extranjera con tal perspectiva, no se encontró trabajos en tal horizonte, sino solo desde una visión del bien jurídico; empero, desde estrictamente la dogmática normativista se construyó una posición lo que permitió explicar el problema de estudio. No se encontró dificultad alguna con respecto a la selección de dogmática, jurisprudencia nacional, pues la bibliografía es abundante y la jurisprudencia vía ingreso a las páginas web del Tribunal Constitucional, Poder Judicial.

Descripción de métodos



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



El estudio tiene un enfoque cualitativo porque busca cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos determinantes según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada, para Navarro (2014) el método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. El método utilizado es el inductivo y analítico para así entender el fenómeno de la lucha anticorrupción y contra la inseguridad ciudadana como políticas de estado en el derecho constitucional. Además, debemos tener en cuenta que, siendo el derecho una ciencia social de naturaleza peculiar, su problemática puede ser abordada desde tales perfiles y, sobre todo, buscando ofrecer soluciones concretas a igualmente problemas concretos (Pineda Gonzales, 2008). La metodología utilizada es fundamentalmente teórica, apoyándose en la bibliografía, extrapolando ideas al objeto de estudio, con su análisis y deducciones y conclusiones establecidas como objetivos a alcanzar, refrendando parte de lo expuesto a nivel teórico, con la realidad, a través de métodos sociológicos y técnicas cualitativas tales como las entrevistas.

El Objeto de la investigación es la lucha contra la inseguridad ciudadana que tiene dos ejes centrales; el primero se refiere en cuanto a las normas y disposiciones de la Constitución u otras normas que requiera interpretación para comprenderla de mejor forma. El segundo se relaciona con el examen de los contenidos que comprende la investigación o la realidad problemática investigada, en este caso, el asunto de las políticas de estado en el derecho constitucional peruano (concepto, características, regulación constitucional, funcionamiento, entre otros)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo Especifico 1. Determinar el marco normativo que puede asumir la Constitución respecto a los temas de Corrupción y de la inseguridad ciudadana en el Perú

Corrupción y seguridad ciudadana

A mayor corrupción, menor seguridad ciudadana. Los resultados de diversas investigaciones como (Arapa Valencia, 2016; Nuñez, 2015; Pillaca, 2015; Rafael Heredia, 2018) han demostrado que, en varios países de la región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. En ese sentido, la corrupción de funcionarios públicos es, con frecuencia, un producto de la delincuencia organizada. Los individuos que participan en actividades ilícitas graves y rentables invariablemente cuentan en algún momento con el apoyo de funcionarios públicos corruptos (Tanzi, 1998).



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



La relación entre corrupción y seguridad es muy estrecha que se llega afirmar que la corrupción es necesaria para el funcionamiento de la delincuencia organizada, y que la capacidad de los grupos delictivos organizados para crecer y tener éxito depende en gran medida de las relaciones que establezcan con funcionarios corruptos. Asimismo, se ha constatado la influencia de la corrupción en las entidades participantes de la seguridad ciudadana y sus diversas manifestaciones, dependen del actor que se trate. En el caso de la Policía, son tres los principales niveles de corrupción. El primero corresponde al *área administrativa* e incluye los oscuros manejos de recursos humanos y económicos. El segundo es el *nivel operativo*, aquel relacionado con la prestación de servicios de la Policía y donde determinadas unidades policiales tienen un amplio margen de maniobra para protagonizar actos de corrupción. Y el tercer nivel es el *ámbito político*, el cual abarca el intercambio de privilegios, prebendas y prerrogativas gubernamentales a cambio de protección y mal entendida lealtad policial.

Por diversas razones, la corrupción operativa también tiene efectos devastadores, como la administrativa. Primero, porque si el servicio público tiene un precio, se vulnera su carácter universal y gratuito; se generan barreras para el acceso a la justicia, que afectan a los más pobres; y se hace tabla rasa de la imparcialidad de los funcionarios públicos, socavando su legitimidad. Segundo, la vulnerabilidad a la corrupción destruye, en el proceso, el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos, que son los pilares del Estado de derecho, y ata de manos a las instituciones del sistema para hacer cumplir la ley, que es su razón de ser. Con frecuencia, la corrupción administrativa y la operativa en forma extendida prosperan y se consolidan cuando son, por lo menos, toleradas por las autoridades políticas, que no hacen uso de su autoridad para ponerles freno (Quiroz, 2015).

Elementos básicos del diagnóstico de la corrupción

Los beneficios derivados del acto corrupto son, principalmente, económicos, por cuanto consisten en la apropiación directa de un bien público, ya sea en dinero o en especie, o en la obtención de recursos de particulares que requieren de servicios o trámites estatales; o en la consecución de bienes o ingresos monetarios derivados de una decisión pública –aprobación de una ley que crea un monopolio, que rebaja impuestos, que valoriza unos terrenos, que elimina requisitos; o actos como no aplicar una sanción, no perseguir o controlar una actividad delictiva; decisiones judiciales que obligan al pago de sanciones injustificadas a las entidades públicas o pensiones a particulares–, o de la utilización de información obtenida en ejercicio de funciones públicas – sobre localización de inversiones, tasa de cambio, inflación, etc.–. En los casos mencionados, de



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



forma más o menos directa, los responsables de la práctica de corrupción obtienen un beneficio económico que incrementa su patrimonio. Además, el poder del Estado puede utilizarse para consolidar una preponderancia política y de control sobre administraciones públicas en un territorio determinado, pero incluso en estos casos ese poder genera beneficios económicos; en otras ocasiones, la corrupción se produce para garantizar impunidad (Bidart Campos, 1994)

La corrupción puede ser: (a) *Sistémica*; es decir, presentarse en procesos de captura de aparatos del Estado en forma amplia, que comienzan desde los procesos electorales y se expresan en una manipulación completa de la gestión de una Administración territorial, hasta llegar a formas extremas como la configuración cooptada del Estado. (b) *Presentarse en distintas fases del gobierno y la gestión*, desde la elección, pasando por la expedición de las normas hasta su aplicación. (c) *Ser de magnitud grande o pequeña*, dado que puede implicar desde la manipulación de una proporción importante de los recursos de inversión hasta las pequeñas comisiones para la realización de trámites. (d) *Darse en las distintas ramas del poder y entidades*: las prácticas corruptas se pueden dar tanto en el ejecutivo, como en el legislativo, en el judicial y en los órganos de control.

Formas de corrupción

Las prácticas mediante las cuales los corruptos pueden obtener beneficios económicos y de otra índole, son diversas: (a) Manipulación de los procesos electorales para poner en los cargos políticos a funcionarios comprometidos con grupos y personas interesadas en beneficiarse directamente del aparato de Estado; esta manipulación puede incluir prácticas como la compra de votos, el trasteo de votantes, la amenaza o presión a los votantes para que voten en determinado sentido, la financiación de las campañas a cambio de favores concretos, la amenaza armada acompañada de órdenes a la población y determinados candidatos sobre las conductas a seguir. (b) Manipulación de las decisiones normativas y fallos en todas las ramas del poder y de los órganos de control; comprende la expedición de leyes, ordenanzas y acuerdos, de decretos en los tres niveles de gobierno; fallos judiciales y de los órganos de control. (c) Apropiación directa de dinero o bienes muebles e inmuebles públicos por parte de gobernantes o funcionarios públicos. (d) Manipulación de los procesos contractuales con el fin de beneficiar a grupos o personas específicas mediante el pago de comisiones. (e) Manipulación de las funciones ejecutivas y de prestación de servicios o realización de trámites ejercicio del control, otorgamiento de subsidios, expedición de documento de identidad, aprobación de una licencia, instalación de una línea telefónica. (f) Obtención de utilidades en negocios realizados con base en información conseguida



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



en ejercicio de funciones públicas y que debería ser reservada. Las prácticas corruptas pueden estar tipificadas en los códigos penales, disciplinarios o fiscales, en los cuales se fijan además las penas por su realización. Se trataría en este caso de la corrupción ilegal, en el sentido de que la ley ha especificado la práctica como un delito o conducta sancionable, la cual puede coexistir con una corrupción legal, en aquellos casos donde se produce un aprovechamiento indebido de recursos públicos, pero la conducta no ha sido tipificada penalmente. En la medida en que avanza la tipificación penal, disciplinaria y fiscal de prácticas corruptas, la corrupción está definida principalmente en los códigos correspondientes.

El objetivo general de la política de lucha contra la corrupción

Fundamentalmente, es eliminar las prácticas corruptas o investigarlas y sancionarlas oportunamente para reducir la pérdida de recursos públicos, lo cual puede expresarse en objetivos específicos como los siguientes, que servirán de base para la fijación de metas, si se dispone de información: (1) Cambiar la percepción negativa por parte de ciudadanos, usuarios, líderes de organizaciones sociales, funcionarios y empresarios. (2) Disminuir la tolerancia con la corrupción. (3) Mitigar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de gestión administrativa y misional (gestión del recurso humano, contratación pública, etc.). (4) Disminuir la situación de impunidad en la justicia y los órganos de control. (5) Aumentar la participación de organizaciones sociales en la prevención y control de la corrupción. (6) Aumentar la transparencia y el acceso a la información sobre la corrupción por parte de la Rama Judicial y de los órganos de control en todos los niveles de gobierno, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Personerías, Superintendencias, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda en lo relativo al Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.

Por tanto, es importante evaluar sus costos y entender que es imposible eliminarla por completo, pues en muchos casos será demasiado costosos o aparatoso y disfuncional tratar de acabar del todo con ella: “lo más que se puede esperar es que las prácticas corruptas se mantengan dentro de límites tolerables” objetivos hipotéticos, basado en la documentación general sobre los problemas de corrupción y coherente con el árbol de problemas planteado.

Justificación de la política de estado

En la década de los noventa, el Estado peruano inició un proceso de reconversión estructural, que conocemos como reforma de primera generación. En esa reconversión, se relevó la aplicación de políticas para el reordenamiento del gasto público, la liberalización del comercio internacional,



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras y a la privatización de empresas públicas, entre otras políticas. Sin embargo, el modelo económico neoliberal de los noventa devino un modelo primario-exportador que reprimarizó la economía y colocó como dominantes a sectores como la minería y servicios. Posteriormente, entre los años 2001 y 2005, se aplicaron reformas de segunda generación. Esas reformas estaban orientadas a acercar el Estado a los ciudadanos de manera más homogénea, iniciándose un profundo proceso de transformación, que significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, sirvieran de manera más cercana y efectiva a la ciudadanía. Con esto se dio inicio a tres procesos fundamentales en nuestro país: la descentralización, la regionalización, y la reforma y modernización del Estado. Es cierto que en el periodo de aplicación de las reformas de primera y segunda generación el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico en la región, también es cierto que esa mejora económica no se acompañó con un crecimiento de la capacidad del Estado para generar las condiciones necesarias, entre ellas las de la seguridad ciudadana, que asegurasen un desarrollo sostenible y que fueran sustento del desarrollo económico y social en el Perú. (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013)

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como sistema funcional En julio de 2001, el Gobierno de Transición Democrática formuló el documento Bases de la reforma policial con el propósito de estructurar una institución al servicio de la comunidad local que sea capaz de atender los problemas de un mundo cada vez más globalizado. Una de sus propuestas consistía en la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que sería el encargado de diseñar la política en esta materia y armonizar los esfuerzos sectoriales y de la sociedad civil. Meses después, en octubre de 2001, el gobierno de Alejandro Toledo constituyó la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional, con una composición amplia y plural, integrada por la Alta Dirección del Ministerio del Interior, el Comando Policial, oficiales generales y superiores provenientes de las ex Fuerzas Policiales y la Sanidad, así como por un representante de suboficiales y personalidades civiles. Levisky (2012) en su informe final, aprobado en marzo del 2002,110 recomendó, entre otros, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como un espacio multisectorial que oriente las políticas en esta materia y que, a su vez, impulse la formación de comités provinciales y distritales como órganos de participación, supervisión y control ciudadano.



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Objetivo Especifico 2.- Plantear un diseño básico consignado en la Constitución como Políticas de Estado para luchar contra la corrupción y la inseguridad ciudadana

Líneas de acción

Las estrategias o líneas de acción dependerán de la situación particular del municipio y de los objetivos específicos buscados; sin embargo, hay unas líneas generales de intervención las cuales se fundamentan en el marco normativo, tanto en las convenciones internacionales como en la legislación propia, así como en la política nacional (Sanchez Agesta, 1990).

La estructura del plan de acción de la política de un departamento o de un municipio, dependerá del análisis realizado y la identificación de las causas directas y secundarias, que forman la base para definir los objetivos cuyo cumplimiento en la lucha contra la corrupción se puede adelantar mediante: (1) Una estrategia de prevención. (2) Una estrategia de investigación y sanción. Y (3) Una estrategia de políticas y organización institucional.

Este esquema se fundamenta en las estrategias generales planteadas en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, especialmente en la Convención de las Naciones Unidas. La lucha contra la corrupción se basa, en primer lugar, en el mejoramiento del gobierno y de la administración mediante la intervención sobre los distintos elementos de la gestión pública. Esta es una intervención indirecta, en la medida en que las iniciativas de buen gobierno no tienen como propósito exclusivo y principal la lucha contra la corrupción; sin embargo, al mejorar las prácticas de planeación, de presupuesto, de contratación, de carrera administrativa y de transparencia, se crean condiciones favorables a la buena gestión y, en consecuencia, disminuyen los riesgos de corrupción. En este sentido, se incluyen aquí líneas de acción de largo plazo como la educación y la formación desde la educación básica, así como las iniciativas del sector privado tendientes a su autorregulación. En segundo lugar, la lucha contra la corrupción se basa en las acciones de identificación, investigación y sanción de prácticas corruptas y de control y seguimiento a los recursos públicos apropiados por particulares. Considerando que, a pesar de las distintas acciones preventivas, existen siempre situaciones y grupos o personas propensas a las prácticas corruptas, es fundamental reforzar la capacidad de petición de cuentas y de control, tanto institucional como social. En tercer lugar, se requiere contar con esquemas institucionales responsables de la coordinación de la formulación y ejecución de las políticas. El cual tiene como principal objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el país, a través de 5 estrategias: a) Mejorar el acceso



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



y la calidad de la información pública para prevenir la corrupción. b) Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción. c) Aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la corrupción. d) Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. e) Reducir la impunidad en actos de corrupción.

Políticas contra la inseguridad ciudadana

Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño de políticas públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas. En un escenario en el que falte la información bien sistematizada, los procesos de análisis del problema, por parte del Estado, se dificultan en extremo. Entonces, se requiere trazar, en el corto plazo, nuevas estrategias y esfuerzos conjuntos para enfrentar esa seria deficiencia; los esfuerzos deberán ser desplegados, en especial, por parte de las entidades públicas vinculadas al sistema de administración de justicia. Desde esta perspectiva, la política pública debe ser diseñada y consensuada bajo el contexto de complejidad en el que se ve inmersa, y deberá estar articulada a la séptima Política de Estado del Acuerdo Nacional, lo que viabilizará su implementación a través del diálogo y el consenso de la Sociedad Civil, Partidos Políticos, Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y Locales (Sanchez Agesta, 1990); para ello, se requiere un enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de las realidades regionales y locales en los ámbitos urbano y rural, y promueva la activa participación del conjunto de actores públicos y privados del país. Lejos de ser motivo de división, el tema de la seguridad en el Perú debe cohesionarnos. Esa cohesión incluye la articulación de los planes anuales regionales y locales a los objetivos estratégicos y a las metas del plan con vigencia de cinco años que hoy presentamos. Con este propósito, el presente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 en adelante, el Plan recoge y sistematiza los aportes no solo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, sino también de la sociedad civil organizada, el sector privado y académico, especialistas y vecinos. Se han definido los siguientes seis objetivos estratégicos en el horizonte 2013-2018: 1) Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido. 2) Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. 3) Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. 4) Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. 5) Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



confianza ciudadana. 6) Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia.

Este Plan se propone, por un lado, reducir los índices de criminalidad, y, por otro lado, incrementar la eficacia de las acciones conducentes a combatir el crimen y a prevenir el delito (Garay, 2007). Entre otras variables, se deberá disminuir el porcentaje de víctimas personales, la tasa de homicidios y el porcentaje de personas privadas de libertad, así como el porcentaje de reingresantes a penales. Asimismo, se deberá reducir el porcentaje de mujeres víctimas de violencia, y se deberá luchar contra la prevalencia del consumo de drogas ilegales tales como la cocaína, la marihuana, la pasta básica de cocaína (PBC), entre otros factores. Todas estas variables están vinculadas, directa e indirectamente, a la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Sin embargo, la implementación y los resultados del Plan se concretarán solo si se asume un liderazgo político firme y un compromiso público-privado para realizar, con oportunidad y eficacia, los planes anuales en los tres niveles de gobierno. Se requiere, además, la presencia y acompañamiento de un ente rector. Una vez aprobado el Plan por los actores pertinentes, necesitamos rediseñar y costear los planes, programas y proyectos que se desprendan de aquel, estableciendo las estrategias para su financiamiento. Un plan sin recursos es solo un documento formal, sin mayor trascendencia de acción sobre la realidad concreta. (Fruhling, 2002) Por esa razón, es importante señalar que también los planes, programas y proyectos vinculados al Plan deben tener prioridad nacional, por lo cual la ejecución, el monitoreo y la evaluación periódica se convertirán en un factor clave de éxito.

Como refiere Basombrío (2003), plantea la alianza que debe establecer el gobierno con las municipalidades y con las cifras de victimización, que el Ejecutivo buscará reducir en 25%. Para lograr ello, expuso siete medidas puntuales: (1) Fortalecer el programa nacional de recompensas. (2) Realizar más de 50 mega operativos el próximo año. (3) Implementar el programa "Barrio Seguro", que plantea la intervención de más de 100 barrios el próximo año. Estos serán los que tengan mayor focalización de crimen. (4) Implementar 500 proyectos de prevención para el 2017. (5) Tener mayor y mejor presencia policial, con 10 mil policías nuevos en las calles pendientes de los ciudadanos. (6) Dar mayor importancia a la investigación criminal. (7) Tener en cuenta a la tecnología como parte de los instrumentos para lograr reducir la inseguridad.

Políticas contra la inseguridad ciudadana



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Para resolver este problema, se requiere el diseño de una política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Uno de los instrumentos más utilizados para el estudio y visualización de la conformación global de la política pública es el esquema conceptual de las fases: identificación de problemas, formulación de la política, decisión, implementación y evaluación. Sobre la base de esta secuencia de etapas, se debe abordar el diseño de la política pública de seguridad ciudadana desde una perspectiva multisectorial e intergubernamental, con una efectiva participación ciudadana, del sector privado y de los medios de comunicación. Esta política debe ser respaldada con normas jurídicas provistas de los recursos humanos y financieros necesarios y debe tener las siguientes características: (i) integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto; (ii) intersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno; (iii) participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad; y (iv) universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.

No obstante, toda política debe asegurar una adecuada implementación, monitoreo y evaluación, a fin de verificar el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos establecidos en ella.

Diagnóstico de la inseguridad, la violencia y el delito en el Perú

Antes de plantear el nuevo enfoque de la seguridad ciudadana como política de Estado con miras a establecer el Plan, es necesario realizar un diagnóstico integral de la inseguridad, la violencia y el delito en el Perú. El diagnóstico debe dar cuenta de la situación actual de la problemática, y debe explicar las causas y los problemas y efectos que la inseguridad, la violencia y el delito traen al Perú. Situación actual Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, la violencia y el delito en un determinado territorio (PeruEduca, n.d.). Los más importantes son los homicidios, la victimización, la percepción de inseguridad, la confianza en las instituciones y la situación del sistema penitenciario. Los homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en una sociedad, aquella que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparación, estos se presentan en función de una tasa por 100 mil habitantes, que en el Perú no es muy alta si se compara con la de otros países de las Américas, que resulta siendo la segunda más violenta del mundo después del África.

Las causas son multidimensionales, si bien no existe una condición necesaria o suficiente para explicar la violencia y el delito, sí se pueden identificar factores que aumentan el riesgo o agravan



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



la vulnerabilidad de las sociedades. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica como factores la abundancia de hombres marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos) la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Débil participación de los ciudadanos

Entre los factores vinculados a la débil participación ciudadana, de la sociedad civil organizada, del sector privado y de los medios de comunicación en la prevención de la violencia y el delito, también se incluye la falta de valores y de una cultura cívica respetuosa de la ley. Los medios de comunicación venden la violencia en un nivel primario, lo cual permitiría construir una percepción a todas luces distorsionada del fenómeno, pudiendo magnificar la realidad, insensibilizar a la población local y alertar a la internacional (Garay Salamanca, 2007). De esta manera, banalizan la violencia al insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.

Baja calidad y cobertura del servicio policial

La baja calidad y cobertura del servicio policial se debería a varios factores: al escaso desarrollo organizacional de la Policía Nacional; a la insuficiente infraestructura y equipamiento; a la debilidad del régimen disciplinario y de lucha contra la corrupción de sus integrantes; a la baja profesionalización de sus efectivos y su régimen laboral; al limitado sistema de información y comunicaciones; y a la escasa vigilancia y patrullaje de las calles. En la última década, solo uno de cada tres peruanos (34.2 %) expresó su confianza en la institución policial, lo que da cuenta de una amplia desconfianza ciudadana. No solo hay problemas en la gestión de los recursos humanos y en la organización, sino también en la infraestructura, el equipamiento y modernización tecnológica. En la actualidad, las 1,397 comisarías existentes en el país cuentan con 34,805 policías, es decir, una tercera parte del personal a nivel nacional, solo uno de cada tres realiza labores de patrullaje (34.3 %). Tal como lo afirma (Tito Murillo, 2017).

El Problema de la inseguridad ciudadana requiere soluciones multicausales. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



tenencia de armas cortas... pero al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad. A pesar del sensacionalismo con que se suele tratar el tema y del interés de algunos sectores en ganar votos como sea, una parte considerable de la opinión pública está abierta a una discusión más amplia

Culpabilidad de los Jueces

Se argumenta que estarían dejando salir a delincuentes que después vuelven a reincidir. La realidad no es tan sencilla. Muchos de los jóvenes encarcelados llegaron al delito desde la marginación total. Cuando salen con prontuarios penales adicionales están mucho peor que antes para obtener algún tipo de inserción. Si la sociedad no hace nada al respecto, es difícil sorprenderse después (Pillaca, 2015).

Se estima que el costo es mucho menor que el de los juicios y cárceles (Talavera Elguera, 2000). Se está facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado. Mientras que la sociedad es indiferente a su destino, las mafias les ofrecen incentivos económicos inmediatos. Como señala Garay (2007) la base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas... Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación". La Secretaría de Seguridad Pública estatal estima que uno de los carteles de la droga tiene en Ciudad Juárez el control de 521 pandillas integradas por 14.000 menores de 14 a 17 años. Un debate con estas y otras simplificaciones crea el ambiente para la mano dura que agresivamente postulan los sectores más conservadores. A ellos se les suman quienes tratan de conseguir ganancias electorales con el tema.

Es importante que la Constitución debe ser considerada como políticas de estado, la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Por eso la presente se enfocó a partir del marco constitucional para que dentro del esquema del pacto social, que refleja la legitimidad de una Constitución, exprese una necesidad o una demanda colectiva, donde se encuentra comprometido el soberano pueblo que tiene el poder originario, para que comprometa a las instituciones pública y privadas y al mismo Estado a fin de que puedan tener abocamiento de emprender la lucha contra la corrupción de una manera decidida, así como contra la inseguridad ciudadana.

CONCLUSIONES

Es posible establecer marcos normativos desde la Constitución Política del Estado del Perú, que posibiliten políticas de estado de lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



El marco normativo que la Constitución Política del Estado pudiera asumir es en el Capítulo IV de los deberes del Estado. No es necesario que se pueda detallar todo el contenido normativo puesto que para ello se daría una Ley específica o un Reglamento que desarrolle el contenido normativo.

Tener el estatus de Política de Estado reconocido por la Constitución Política de un País, al tema de la lucha contra la corrupción y lucha contra la Inseguridad ciudadana que tienen un peso de viabilidad y protección especial, no se trata de solamente de consignarlo, sino de presupuestarlo y establecer los componentes de toda política de Estado para su cabal cumplimiento.

AGRADECIMIENTOS

A todos los docentes, amigos, familiares, compañeros de estudio y demás personas que han contribuido en el logro de esta meta.

CONFLICTOS DE INTERES

La autora (MLOT), no tiene conflictos de ninguna índole.

REFERENCIAS

Afanasiev, V. (1973). *Manual de Filosofía* (Tercera).

http://www.abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Afanasaiev/Manual-de-Filosofia---Victor-Afanasaiev.pdf

Altamirano, S. (2017). *La corrupcion en el Peru: ¿Historia o costumbre?* La Voz Actual.

<https://www.vozactual.com/la-corrupcion-en-el-peru-historia-o-costumbre/>

Arapa Valencia, J. R. (2016). La aplicacion de las politicas de seguriad ciudadana en el distrito de Santiago de Cusco [Universidad Andina del Cusco]. In *Repositorio digital de tesis*.

http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/766/3/Jhosep_Tesis_bachiller_2016.pdf

Basombrio, C. (2004). *Seguridad Ciudadana y Actuacion Del estado, Analisis De Tendencias De Opinion Publica*. Instituto de Defensa Legal.

<https://www.amazon.com/Seguridad-Ciudadana-Actuacion-Analisis->



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



[Tendencias/dp/B017AZI9DW](https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61)

- Bazalar Gonzales, L. A. (2012). *Corrupción Administrativa y Control Interno* [Universidad Nacional del Callao]. In *Universidad Nacional del Callao, Vellavista, Perú*. <http://repositorio.unac.edu.pe/handle/UNAC/2039>
- Bidart Campos, G. J. (1994). *Manual de la Constitución reformada*. <https://biblioteca.mpf.gov.ar/meran/opac-detail.pl?id1=1680>
- Castillo, A. (2001). *Medición de la corrupción: un indicador de la rendición de cuentas*. https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc5.pdf
- Céspedes Zelaya, J. A. (2009). *La convención de las naciones unidas contra la corrupción en Costa Rica: Una mirada crítica y una propuesta práctica de implementación* [Universidad de Costa Rica]. <https://iiij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/TESIS-DE-LICENCIATURA-DE-JORGE-ANDRES-CEPESDES-ZELAYA.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2004). *Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana*. [http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/021documentos/77563E5C1770561A052581540059D365/\\$FILE/Informe_N_81.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/021documentos/77563E5C1770561A052581540059D365/$FILE/Informe_N_81.pdf)
- Fayt, C. S. (1973). *Derecho-Politico*. Universidad Nacional de la Plata. <https://franjamoradaderecho.com.ar/biblioteca/abogacia/2/POLITICO/Derecho-Politico-Carlos-Fayt-Tomo-1.pdf>
- Fruhling E., H. (2003). *Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto?* Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_01_policiacomunitaria.pdf
- Garay Salamanca, L. J. (2007). *Conflicto Armado y Delincuencia Organizada. Escenarios de Corrupción. A propósito del Caso de Colombia*. Corporación Transparencia por Colombia. https://issuu.com/transparenciaporcolombia/docs/cuaderno_transparencia_13



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



- García Mejía, M. (2016). *Evidencia y marcos conceptuales de la lucha contra la corrupción en la policía de latinoamérica* [Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/35564/1/T36821.pdf>
- Gutierrez, E. (2016). *Análisis de los factores del problema de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Abancay-2015* (Issue July) [Universidad Tecnológica de los Andes]. http://repositorio.utea.edu.pe/bitstream/handle/utea/118/Tesis-Análisis_de_los_factores_del_problema_de_la_inseguridad_ciudadana_T040_31020536_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Levisky, S. (2012). Decreto Supremo No 004-2013-PCM. *Decreto Supremo No 004-2013-PCM*, 21. <https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf>
- Macera, D. (2015, June 21). ¿Cuál es el Costo de la Corrupción en el Perú? *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/politica/actualidad/costo-corrupcion-peru-informe-385423-noticia/>
- Mattos, A. (2015). *La Seguridad Ciudadana Bajo El Enfoque De La Seguridad Humana* [Universidad de San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/2646/mattos_va.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Navarro Charrez, C. L. (2014). Epistemología y metodología. In *Grupo Editorial Patria* (Primera, Issue 28). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Núñez, M. (2015). *Acciones estratégicas para enfrentar la inseguridad ciudadana en la provincia de San Román* [Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez]. <http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/343/P27-003.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Ochoa Romero, R. A. (2017). Corrupción. Significado Y Estrategias Internacionales Y Nacionales Para Su Prevención Y Persecución. In *Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurídicas de la UNAM.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4315/24.pdf>

Peces-Barba, G. (1980). Historia de los derechos fundamentales. *Latina Universitaria de La Universidad Complutense*, 7. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Feces_RJCM_1987.pdf?jsessionid=DF52DC3F52E4284A164A3F3C47D73BCB?sequence=1

PeruEduca. (n.d.). *¿Que hacemos para combatir la corrupcion?* Retrieved April 21, 2021, from http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2020/12/juntos-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion/-/journal_content/56_INSTANCE_7sKAQmKmimQx/10179/361857289?p_p_state=pop_up&_56_INSTANCE_7sKAQmKmimQx_viewMode=print

Pillaca, J. (2015). *Los problemas de Gestión de la Información como insumo para la elaboración de políticas públicas de crimen y seguridad en el Perú entre 2012 y el 2014: El caso del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana* [Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6560>

Pineda Gonzales, J. A. (2008). *Investigación jurídica. Elaboración de la tesis en los diseños cuantitativos y cualitativos*. Editorial Pacifico. http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?jsessionid=8b6ed08daf7cf39a2e488f7e6a01?id_investigador=40823

Presidencia del Consejo de Ministros. (2013). Política Nacional De Modernización De La Gestión Pública Al 2021. *Perú*, 73. <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf>

Quiroz, A. (2015). Memoria historica sobre la corrupcion en el Peru. *Dialnet*, 462. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/09/Memoria-Histórica-sobre-la-corrupción-en-el-Perú.pdf>

Rafael Heredia, J. S. (2018). *Propuesta de estrategia sociopolitica economica y juridica*



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



para prevenir y evitar la delincuencia comun y lograr seguridad ciudadana

[Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo].

<https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/2895/BC-TES-TMP-1715.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rodolfo Luis, V. (2003). *De la Ley al Derecho*. Porrua.

https://www.elsotano.com/libro/de-la-ley-al-derecho_10139577

Sanchez Agesta, L. (1990). Principio de teoria Politica. In *Iber Libro*. Editoria de derecho reunidas.

<https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/principios-de-teoria-politica/autor/luis-sanchez-agesta/>

SINASEC. (2018). *Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana | Seguridad Ciudadana*.

<https://www.seguridadidl.org.pe/actores/sistema-nacional-de-seguridad-ciudadana>

Suarez Garza, A. J. (2011). *Seguridad Pública y Participación Ciudadana : Un Estudio acerca de la Participación Ciudadana y su impacto en la Seguridad Pública en México* [Universidad Autonoma de Nuevo Leon].

http://eprints.uanl.mx/2847/1/Tesis_Junio_10_2011.pdf

Talavera Elguera, P. (2000). *Compendio de derecho judicial*. Consejo de Coordinacion Judicial.

http://sbiblio.uandina.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6885&shelfbrowse_itemnumber=10462

Tanzi, V. (1998). *Corruption Around the World : Causes, Consequences, Scope, and Cures*. International Monetary Fund.

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Around-the-World-Causes-Consequences-Scope-and-Cures-2583>

Tito Murillo, A. M. (2017). *Participación comunitaria y la seguridad ciudadana en la Región Lima 2012-2014*. 2012–2014.

http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/199898/1/TESIS_ANGEL_TITO_MURILLO.pdf



REVISTA PACHA DERECHO Y VISIONES

de la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno*

ISSN-e: 2709-9822

2022 - Vol. 3 (1), DOI: <https://doi.org/10.56036/rp.v3i1.61>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

